**Las ayudas federales a los estados deberían estar condicionadas a una mayor transparencia**

por [Marc Joffe](https://www.washingtonexaminer.com/author/marc-joffe) y [Jonathan Bydlak](https://www.washingtonexaminer.com/author/jonathan-bydlak)

29 de julio de 2020

Es probable que la legislación del Congreso para abordar los efectos económicos de la pandemia de COVID-19 contenga fondos federales para impulsar los presupuestos de los gobiernos estatales y locales, la mayoría de los cuales enfrentan fuertes caídas de ingresos. Los costos del apoyo federal para el gasto estatal y local superan los posibles beneficios, pero desafortunadamente, eso no ha impedido que el Congreso gaste más allá de sus posibilidades en el pasado. Después de más de $ 3 billones de alivio este año, si el Congreso avanza con más gastos, es importante que ningún programa de apoyo recompense o aliente la mala gestión fiscal en los gobiernos estatales y locales.

Exigir que los estados proporcionen datos de gastos a los contribuyentes y aumenten la transparencia para obtener fondos de ayuda es una forma potencial de fomentar la responsabilidad fiscal durante la pandemia y más allá. Esta idea ya ha atraído cierto [impulso](https://www.routefifty.com/finance/2020/07/groups-call-more-accountability-state-local-government-aid/166672/) y podría incluir requisitos de transparencia financiera de sentido común.

Como mínimo, se debería exigir a los gobiernos que reciben fondos federales que informen cómo se gastó la ayuda a nivel de partida. ¿El dinero se destinó a responder directamente a los daños causados ​​por la pandemia o, en cambio, se utilizó para tapar los agujeros preexistentes en los sistemas de pensiones? Los contribuyentes deberían poder saberlo.

Requerir este nivel de transparencia no es nada nuevo. Cuando la administración Obama implementó la Ley de Recuperación y Reinversión Estadounidense de 2009, creó un sitio web llamado [recovery.gov](https://web.archive.org/web/20120803032640/http%3A/www.recovery.gov/Pages/default.aspx) para mostrar cómo se gastaba el dinero del estímulo. Un descendiente de este proyecto, [usaspending.gov](https://www.usaspending.gov/#/) , ahora proporciona detalles de todos los gastos federales. Junto con el trabajo de un inspector general especial, esta transparencia [aseguró](https://www.washingtonpost.com/outlook/2020/04/10/trump-inspectors-general-drain-swamp/) que los fondos desperdiciados de los contribuyentes se mantuvieran al mínimo.

Muchos gobiernos estatales y locales también proporcionan gastos detallados de “chequera”. Un [informe de](https://uspirg.org/sites/pirg/files/reports/FtM%20NATIONAL%20FINAL%20VERSION_0.pdf) 2018 del Grupo de Investigación de Interés Público de EE. UU. Calificó los sitios web de transparencia de gastos para cada estado. Doce obtuvieron calificaciones B o más, con [Ohio](https://checkbook.ohio.gov/) y [West Virginia](http://wvtransparency.com/) proporcionando los mejores datos, lo que ilustra que los estados no necesariamente tienen que ser muy grandes o ricos para ser transparentes. Desde que apareció el estudio PIRG, un estado que recibió una calificación F, California, ha mejorado drásticamente su puntaje al presentar su nuevo sitio web [Open Fi $ Cal](https://open.fiscal.ca.gov/) .

El apoyo federal debe usarse para alentar a más gobiernos estatales y locales a seguir las mejores prácticas para la transparencia del gasto, comenzando por cómo se gastan los nuevos fondos federales. Pero hay otro problema de informes que el Congreso también puede ayudar a resolver: estados financieros estatales y locales tardíos, poco frecuentes y opacos.

Debido a que la Comisión de Bolsa y Valores carece de autoridad para regularlos, las prácticas de divulgación de los emisores de bonos municipales están muy por debajo de las normas impuestas en los mercados de valores corporativos. Mientras que un emisor de bonos corporativos regulado por la SEC normalmente produce un informe financiero trimestral dentro de los 45 días posteriores al final de su período de informe, el emisor de bonos municipales promedio solo informa anualmente y tarda más de seis meses en hacerlo. Algunos emisores tardan años en presentar informes auditados (entre ellos, la quiebra Puerto Rico).

Una encuesta reciente de estados financieros auditados por Truth in Accounting encontró que Illinois [tardó 418 días](https://www.truthinaccounting.org/library/doclib/FSOS-booklet-2019.pdf) en publicar su informe. Seattle [tardó 301 días](https://www.truthinaccounting.org/library/doclib/Financial-State-of-the-Cities-2020.pdf) . Algunas entidades más pequeñas tardan incluso más que eso: al momento de escribir este artículo, Compton, California, [aún tiene que producir](https://emma.msrb.org/IssueView/Details/EA325025) sus estados de cuenta de 2015, 2016 y 2017, aunque recientemente publicó estados financieros auditados para 2018.

Las empresas públicas proporcionan estados financieros no auditados utilizando el Formulario 10-Q de la SEC cada trimestre. Algunos gobiernos estatales y locales proporcionan informes provisionales, pero no existe coherencia o estandarización en todo el sector público.

Sin mencionar que las divulgaciones anuales continúan tomando la forma de archivos PDF voluminosos, opacos y con formato inconsistente más de una década después de que la SEC [adoptó](https://www.sec.gov/rules/final/2009/33-9002.pdf) un estándar de informes legibles por máquina para los emisores de seguridad corporativa. Este formato, conocido como eXtensible Business Reporting Language, está siendo utilizado por empresas de todo el mundo, así como por gobiernos locales en España, Italia y Brasil. Como lo [demostró](https://www.willcountyauditor.com/xbrl-cafr-2018) el año pasado el condado de Will, Illinois, es posible que los gobiernos estatales y locales también usen XBRL; solo necesitan la "voluntad" para hacerlo, o mejor aún, una patada en los pantalones del Congreso.

Ni la SEC ni la Junta de Reglamentación de Valores Municipales autorreguladora pueden hacer mucho para mejorar la divulgación financiera de los gobiernos estatales y locales porque tienen expresamente prohibido regularla. En la década de 1970, la Sección 15B de [la Exchange Act](https://www.nyse.com/publicdocs/nyse/regulation/nyse/sea34.pdf) fue enmendada para evitar que estas instituciones requieran que los gobiernos estatales y locales mejoren su divulgación financiera como condición para emitir más bonos.

Someterse a la regulación federal de sus informes financieros es un pequeño precio que los gobiernos estatales y locales deben pagar a cambio de decenas (o cientos) de miles de millones de fondos de los contribuyentes federales. Si el Congreso, a pesar de su propia deuda y déficit masivos, insiste en un mayor gasto de ayuda, debería aprovechar la oportunidad para obligar a los beneficiarios de la ayuda a abrir sus chequeras al escrutinio público. Los contribuyentes se lo agradecerán.

*Marc Joffe es analista senior de políticas en la [Reason Foundation](https://reason.org/%22%20%5Ct%20%22_blank) . Jonathan Bydlak es el director del Proyecto de Política Fiscal y Presupuestaria del*[*R Street Institute*](https://rstreet.org/)*y el creador de*[*SpendingTracker.org*](https://spendingtracker.org/) .